



Valledupar, Cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA.
ACCIONANTE: DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE
ACCIONADO: PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS SAS
VINCULADO: DATA CREDITO y CIFIN
RAD. 20001-41-89-002-2023-00213-00
PROVIDENCIA: FALLO DE TUTELA

Procede el Juzgado a dictar el fallo correspondiente en la acción de tutela referenciada. En la cual se relacionan los siguientes:

I. ASUNTO A TRATAR

El Despacho decide la acción de tutela interpuesta por el ciudadano DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE en contra de PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S., por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición y habeas data.

II. ANTECEDENTES PROCESALES:

Los fundamentos de la demanda son los siguientes:

- Aduce la accionante que, en el transcurso del mes de julio de 2022, revisando su historial crediticio, observo un reporte negativo en las centrales de riesgos relacionados con la obligación No. 010773134, cuya fuente de información es Promotora de Inversiones y Cobranzas.
- Expresa, que no es de su conocimiento tener algún producto adeudado con Promotora de Inversiones y Cobranzas, a quien en ningún momento le otorgo autorización para el tratamiento de sus datos personales.
- Indica que no fue notificada en los términos que ordena la Ley 1266 de 2008, por lo que considera que se esta vulnerando su derecho fundamental al habeas data, por parte de la accionada Promotora de Inversiones y Cobranzas S.A.S., al no actualizar y rectificar la información que se encuentra sobre su comportamiento financiero.

Mediante auto del veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023) se admitió la presente acción de tutela y se dispuso correr traslado de la demanda a las entidades accionada PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S, y a las vinculadas DATA CREDITO y CIFIN (TransUnion) entidades que, a través de su directora de acciones Constitucionales, dieron contestación a las pretensiones del accionante.

III. DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS

La parte actora adjunto:

- Orden de archivo NUNC 200016001075202311598.
- Respuesta de la accionada.

La parte accionada Promotora Inversiones y Cobranzas S.A.S.

- Certificado de Existencia y Representación Legal de PROMOTORA.
- Copia del Pagaré y Carta de instrucciones de la obligación 33010773134.
- Copia de la Solicitud de Productos y Servicios Financieros para la línea de Microcrédito.
- Copia de la autorización expresa, por parte de la señora Diana Paola Rubio Arroyave para ser reportada en las centrales de información, la cual se encuentra explícita en el DECIMO TERCERO del pagare de la obligación 33010773134.
- Copia del estado (extracto) de la obligación 33010773134, mediante el cual Banco Caja Social le notificó en su momento a la señora Diana Paola Rubio Arroyave que “SU



CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
EDIFICIO SAGRADO CORAZON, PISO 3 VALLEDUPAR – CESAR
Correo Electrónico: j02cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tel: 5801739



CRÉDITO PRESENTA MORA. SI PASADOS 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL ENVÍO DE ESTE EXTRACTO PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO, EL BANCO REALIZARÁ EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES POR EL TIEMPO QUE INDICA LA LEY”.

- Copia de la respuesta enviada a la Defensoría del Consumidor Financiero de Banco Caja Social el 28 de noviembre de 2022, con su respectiva constancia de envío.
- Copia del traslado de la respuesta la Defensoría del Consumidor Financiero de Banco Caja Social a la señora Diana Paola Rubio Arroyave.
- Copia de la respuesta a la acción de tutela enviada el 28 de diciembre de 2022 con su respectivo soporte de envío.
- Copia de la sentencia de primera instancia de fecha 29 de diciembre de 2022.
- Copia de la respuesta a la acción de tutela enviada el 3 de febrero de 2023 con su respectivo soporte de envío.
- Copia de sentencia de primera instancia de fecha 9 de febrero de 2023.
- Copia de la respuesta enviada a la fiscalía el 3 de abril de 2023 con su respectivo soporte de envío.

La parte vinculada Transunion allego:

- Certificado de existencia y representación legal la sociedad CIFIN S.A.S – (TransUnion®), en el cual se encuentra inscrito el poder general otorgado.
- Consulta información comercial.
- Copia de la última certificación semestral presentada por la Fuente a CIFIN S.A.S – (TransUnion®), en donde certifica haber obtenido las autorizaciones de los titulares para el reporte de información.

La parte vinculada Datacredito allego:

- Archivo que contiene la Solicitud de Incorporación y de Crédito Directo No. 2481679, Contrato de Vendedor Independiente y el Pagaré No. 2481679 en blanco, con su respectiva Carta de Instrucciones, documentos que fueron suscritos por LA ACCIONANTE.
- Archivo que contiene la Factura de Venta No. AG-01135114 de fecha 27-12-2016.
- Archivo que contiene la Actualización de Dato de fecha 05-08-2015.
- Archivo que contiene las Certificaciones emitidas por INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A.S de fecha 28-09-2022, mediante las cuales se certifica el envío exitoso del mensaje de texto remitido a los números telefónicos registrados por LA ACCIONANTE
- Archivo que contiene el Derecho de Petición recibido y la respuesta emitida por YANBAL con su respectiva prueba de envío.

IV. PRETENSIONES:

Solicita se ordene a Promotora de Inversiones y Cobranzas S.A.S, se proceda con la actualización de la información reportada ante las Centrales de Riesgo.

V. DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO:

El accionante considera que, con los anteriores hechos se está vulnerando su derecho fundamental al habeas data y buen nombre.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La acción de tutela se ha dicho en reiteradas oportunidades está consagrada en el Art. 86 de la Constitución Política Nacional, como un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con el cual puede obtener la protección específica e inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en aquellos casos autorizados por la ley.

6.1. PROCEDEBILIDAD DE LA TUTELA.



El Art. 6 del Decreto 2591 de 1991, establece como condición de procedibilidad de la acción de tutela la de que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

Así mismo la Corte Constitucional, siguiendo el lenguaje del numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, ha exigido, como requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección del derecho fundamental al hábeas data, que el peticionario haya elevado solicitud a la entidad correspondiente, para efectos de corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él.

Cabe resaltar, que dado a que las partes accionadas son empresa privadas para la procedencia de esta acción Constitucional incoada, se requiere de unos requisitos adicionales a los comúnmente exigidos, por tanto, nos vemos en la imperiosa necesidad de remitirnos a lo establecido en el artículo 42, numeral 6 del decreto 2591 de 1991, que regula la procedencia de la acción de tutela contra particulares, el cual expresa:

“ARTÍCULO 42. PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

*(...) “6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.”
(...)*

Así mismo la Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en la mencionada norma, ha exigido como requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección del derecho fundamental al hábeas data, que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que ha sido reportada a la base de datos.

Respecto a este requisito de procedibilidad se observa que este fue cumplido por el accionante, como se aprecia con los anexos allegados con la presente acción constitucional.

6.2. REGULACION LEGAL DEL DERECHO DE PETICION.

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja.

A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una Resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno.

Cuando se hace una petición a las entidades públicas o privadas y estas no la responden dentro del término legalmente establecido en la norma, es motivo para instar a la entidad a dar solución inmediata a la petición, a través de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de nuestra Carta Política, siendo esta un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con la cual se puede obtener la protección específica e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en aquellos casos autorizados por la Ley.

A si las cosas, tenemos que, de las circunstancias obrantes en el expediente, se puede colegir que el accionante pretende se tutele en su favor por violación al derecho de petición, regulado por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que la accionada dio respuesta oportuna a su petición.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición al igual que los demás derechos constitucionales no tienen “per se” el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites previstos por los derechos de los demás y el orden jurídico.

Es un deber de todo ciudadano respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios, son principios intrínsecos que van inmersos en el actuar de todos los ciudadanos colombianos, pero en especial de los funcionarios públicos.

En términos generales, puede decirse que el derecho de petición, se establece legal y constitucionalmente a favor de todas las personas. Cabe resaltar que, para la efectividad del mismo, quien hace uso de este medio, debe cumplir además de las exigencias establecidas en la norma que le da vida jurídica al mismo, la Constitución Política de Colombia, con los requisitos formales establecidos en la ley 1755 de 2015.

Por tanto, tenemos en primer lugar, como característica primordial que la petición debe ser respetuosa, puesto que si no lo fuere y se incumple con este requisito se exime de la obligación



de responder a quien se invoca, por incumplimiento de las condiciones del artículo 23 de la Constitución Política.

En segundo lugar, el derecho de petición puede ser: por interés general, por interés particular, por petición de informaciones, o por consultas.

Cuando se trata de información, esta debe ser veraz e imparcial e inalterada, y puede ser general: acceso a documentos sobre el origen, estructura, funcionamiento, naturaleza, procedimientos etc. y particular: información que se produzca por el ejercicio de sus funciones o que repose en la entidad, exceptuándose el caso de los documentos sometidos a reserva por disposición de la ley o la Constitución Nacional.

Adicionalmente a lo anterior, tenemos que en los apartes de la norma citada se establece los términos en que deben resolverse las peticiones, las cuales serán atendidas de la siguiente manera:

“Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

Pues bien, previo haber dejado claro los postulados que deben seguirse frente a los derechos de petición, entraremos a resolver el asunto puesto a nuestra consideración.

6.3. CONDICIONES EN LAS QUE PROCEDE EL REPORTE DEL DATO NEGATIVO A LAS CENTRALES DE RIESGO.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado algunos principios en aras de garantizar que la información registrada en los bancos sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. En efecto, en la Sentencia T-798 de 2007^[10] la Corte dispuso algunas reglas para el manejo de la información que reposa en las centrales de riesgo, dentro de las cuales se encuentran, (i) la necesidad de que la información reportada sea veraz, lo cual implica proscribir la divulgación de datos falsos, parciales, incompletos e insuficientes, y, (ii) el requisito de autorización previa, escrita, clara, expresa, concreta y libremente manifestada por el titular del dato, como condición para que una entidad financiera pueda divulgar información relacionada con la historia crediticia de una persona. **Para la Corte, “[a]demás debe contar con la autorización previa en los términos anteriormente indicados, el reporte de datos negativos a centrales de información crediticia debe ser informado al titular del dato, con el fin de que este pueda ejercer sus derechos al conocimiento, rectificación y actualización de los datos, antes de que estos sean expuestos al conocimiento de terceros”;** (...) (Negrita y subrayado fuera del texto original)

VII. PROBLEMA JURIDICO.

Corresponde al Juzgado determinar si la accionada Promotora Inversiones y Cobranzas S.A.S., vulnera el derecho de habeas data del accionante reportado en las centrales de riesgo sin cumplir con el lleno de los requisitos.



VIII. CASO EN CONCRETO.

Observa este servidor judicial que la señora DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE, presento ante la entidad accionada Promotora Inversiones y Cobranzas S.A.S, a través de su correo electrónico derecho de petición, solicitando actualización y eliminación del reporte negativo, ante las centrales de riesgo Data crédito y CIFIN, por la vulneración al artículo 12 de la Ley 1266, por no haber sido debidamente notificado previamente antes de ser reportado ante las centrales de riesgos, la cual fue negada por la entidad accionada.

Ahora bien, con respecto a si vulnero el derecho al debido proceso y habeas data del accionante, al no realizar un aviso previo al reporte negativo tal como lo indica el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 Estatutaria de Hábeas Data asigna a **las fuentes de información un especial requisito** el cual consiste en que el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones que envíen a los operadores “*sólo procederá **previa comunicación al titular de la información**, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad*”. Para el efecto, las fuentes deberán enviar el respectivo comunicado a “*la última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de las fuentes de la información*”.

La comunicación previa es un mecanismo de información que permite al titular pagar lo adeudado antes de que se genere el reporte negativo o controvertir aspectos específicos de lo que se le cobra, a saber, el monto de la obligación o de la cuota, la fecha de exigibilidad o la tasa de interés, para citar algunos ejemplos. La ley procura así que el titular de la información pueda ejercer todas las acciones tendientes a que su información sea veraz, completa y actualizada.

Como se mencionó en las consideraciones, y de acuerdo a los principios constitucionales de la administración de datos personales de la *libertad y de la circulación restringida*, los datos personales sólo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular, de tal forma que se encuentra prohibida la obtención y divulgación de los mismos de manera ilícita, como sería el caso de no tener la previa autorización del titular. Por su parte la circulación de la información está sometida a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos, por la autorización del titular y por el principio de finalidad, de tal forma que queda prohibida la divulgación indiscriminada de los datos personales.

También se debe resaltar que la *fuentes de información*, en este caso Promotora Inversiones y Cobranzas S.A.S, puede suministrar el dato personal, siempre y cuando cuente con **autorización previa legal o del titular**, al operador de la información (DATACREDITO- CIFIN S.A), teniendo que responder por la calidad de los datos que entrega.

Así pues, hay dos requisitos que deben observarse para que proceda el reporte negativo, éstos son: (i) la veracidad y la certeza de la información; y, (ii) la necesidad de **autorización expresa**, previa, clara, escrita, concreta y libremente otorgada por el titular del dato, para poder realizar el reporte del dato financiero negativo, con el fin de que el titular de la información tenga la posibilidad de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recopilado en las centrales de riesgo.

En esa medida, cuando el titular de la información encuentre que no ha dado su autorización para el reporte, estaría facultado, debido al incumplimiento de ese requisito, para reclamar la exclusión del dato.¹

En efecto, el objetivo de la citada previsión es permitir que luego de notificar la existencia de la información negativa y la intención de ser reportado, la fuente de la información pueda transmitir el dato negativo al operador, luego de cumplido el término de veinte (20) días calendario siguientes a la fecha del **envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado** que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información, **o del envío de un mensaje de datos**, cuando así se haya pactado con el titular de la información².

Descendiendo al sub exánime, dentro de la contestación allegadas por el accionado Promotora Inversiones y Cobranzas S.A.S, quienes adquirieron por cesión la obligación 33010773134, manifiestan haber realizado la comunicación previa establecida en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

¹ Sentencia T-017 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

² Artículo 2.2.2.28.2 Decreto 1074 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo".



CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
EDIFICIO SAGRADO CORAZON, PISO 3 VALLEDUPAR – CESAR
Correo Electrónico: j02cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tel: 5801739



Para el caso de la accionada Promotora Inversiones y Cobranzas S.A.S, la comunicación previa fue realizada en extracto de la obligación 33010773134, en el cual Banco Caja Social le notificó en su momento a la señora Diana Paola Rubio Arroyave, “SU CREDITO PRESENTA MORA. SI PASADOS 20 DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE ENVIO DE ESTE EXTRACTO PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO, EL BANCO REALIZARA EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES POR EL TIEMPO QUE INDICA LA LEY.”, esto en caso de persistir su incumplimiento en el pago de la obligación, conminándola a ponerse al día con el pago de su obligación so pena de proceder a reportar el incumplimiento del pago antes las centrales de riesgo.

De la relación de las anteriores pruebas salta a la vista que Promotora Inversiones y Cobranzas S.A.S, quienes adquirieron la cesión del crédito, que incluyó además de la transferencia del crédito y la de sus accesorios como prendas o hipotecas si las hubiere, la cesión del reporte ante las centrales de información, toda vez que la obligación no sufrió ninguna modificación, solo subrogó el acreedor de la deuda.

Por lo expuesto, este Juzgado no advierte que se haya vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data del accionante por supuestamente reportar información negativa a DATACREDITO y a la CIFIN S.A, sin contar con su autorización previa, de que trata el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, ya que está plenamente probado que Promotora Inversiones y Cobranzas, continuo con el reporte efectuado por parte de la entidad financiera originadora, quien previo a hacer el reporte a los operadores, le envió comunicación al accionante con el fin de que se pusiera al día en su obligación, advirtiéndole que el reporte se haría veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de su envío.

Ahora bien, considera la accionante que teniendo en cuenta lo resuelto por la Fiscalía General de la Nación, quienes solicitan a la empresa PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS SAS procedan a restablecer el derecho al (la) señor (a) DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE, identificado (a) con la C.C. No. 37575882 de Barrancabermeja (Santander) realizando los ajustes administrativos que correspondan para que esta señor (a) no aparezca como deudor (a) o codeudor (a) de los productos que están a su nombre y le están cobrando, obligación la cual ha desconocido, y eliminar cualquier reporte negativo que se hubiere impartido a las centrales de riesgo por operaciones derivadas en la Empresa PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS SAS; como también exonerarla del pago de deudas generadas a causa de dicho contrato, porque no puede responder por deudas imputables a otra persona.

Considera el Despacho que no radica vulneración a derecho fundamental alguno, esto bajo el entendido que resulta improcedente a través de la acción de tutela, toda vez que corresponde a los Jueces de la Republica, adoptar las medidas de restablecimiento del derecho de las víctimas.

Por otro lado, frente a los derechos de petición efectuados ante las entidad accionad, se encuentra que se dio respuesta clara, concreta y de fondo a lo solicitado por el accionante, respuesta que fue debidamente notificada, así mismo, si el accionante considera que no se haya accedido a lo pedido, no significa que haya vulnerado su derecho de petición, por lo que una respuesta negativa no significa que exista vulneración del derecho, que la entidad emita y entregue al peticionario una respuesta que resuelva la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido.

Así lo advirtió la Corte Constitucional al señalar que la respuesta negativa comunicada al solicitante dentro de los términos establecidos no significa una vulneración del derecho de petición, puesto que, si efectivamente se contesta de fondo el asunto expuesto, se satisface el derecho.

En efecto, la respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio de la entidad competente

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo De Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR, la presente acción de tutela instaurada por **DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE**, contra de **PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S** por las razones antes expuestas.



CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
EDIFICIO SAGRADO CORAZON, PISO 3 VALLEDUPAR – CESAR
Correo Electrónico: j02cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tel: 5801739



SEGUNDO: Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama).

TERCERO: En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

El Juez


JOSSUE ABDON SIERRA GARCÉS
JUEZ



CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
EDIFICIO SAGRADO CORAZON, PISO 3 VALLEDUPAR – CESAR
Correo Electrónico: j02cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tel: 5801739



Valledupar, Cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Oficio No. 1318

Señores:

DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE

Dirección de correo electrónico:

PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS SAS

Dirección de correo electrónico:

DATA CREDITO

Dirección de correo electrónico:

CIFIN (TransUnion)

Dirección de correo electrónico:

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA.

ACCIONANTE: DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE

ACCIONADO: PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS SAS

VINCULADO: DATA CREDITO y CIFIN

RAD. 20001-41-89-002-2023-00213-00

PROVIDENCIA: FALLO DE TUTELA

NOTIFICO FALLO DE TUTELA DE FECHA CUATRO (04) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **DIANA PAOLA RUBIO ARROYAVE**, contra de **PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S** por las razones antes expuestas. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez (FDO) **JOSSUE ABDON SIERRA GARCÉS**.

Atentamente,

ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria